

EL SOCIALISTA

299

Centroamericano



Guatemala: Q 4.00
 Honduras: L 12.00
 El Salvador: US\$ 0.60
 Nicaragua: C\$ 10.00
 Costa Rica: ₡ 500.00

Enero 2020

“Por la Reunificación Socialista de la Patria Centroamericana”

www.elsoca.org

www.facebook.com/elsoca.org

www.twitter.com/elsocca



CENTROAMÉRICA.-

FRÁGILES DEMOCRACIAS EN CRISIS, CORRUPCIÓN Y NARCOTRÁFICO

NICARAGUA.- LAS ENSEÑANZAS DE LA MASACRE DEL 22 DE ENERO DE 1967

CONFLICTOS, ATAQUES MILITARES Y LUCHA ANTIIMPERIALISTA EN IRAK E IRÁN



GUATEMALA.- *La vieja derecha militarista se mantiene en el poder*



EL SALVADOR.- *Insuficiente reforma electoral y maniobras de los partidos*



NICARAGUA.- *Coalición Nacional: la carreta delante de los bueyes*

CENTROAMÉRICA- RETROCESO EN LOS REGÍMENES DEMOCRÁTICOS Y RESTAURACIÓN DE LAS FUERZAS DEL VIEJO ORDEN

En todo el mundo se debate acerca de la crisis de la democracia burguesa. La democracia liberal ha llegado a un punto de evidente agotamiento. Ya no se conquistan más derechos o beneficios sociales—como ocurrió después de finalizada la segunda guerra mundial—, sino que estos derechos (seguridad social, empleo y salarios, etc.) se restringen cada vez más.

En América Latina, el auge de gobiernos “nacionalistas”, mal llamados “progresistas” (1999-2019) fue una pequeña excepción a la regla. El boom de los precios internacionales de materias primas, permitió repartir algunas migajas en el marco de regímenes democráticos que, en la medida que la crisis se acentuó, fueron adquiriendo rasgos bonapartistas y hasta dictatoriales, como ha sido el caso de Venezuela bajo el gobierno de Maduro.

Pero en términos generales, saltando las particularidades de cada proceso nacional, el desencanto de los votantes se hace sentir por todos lados. En Europa, por ejemplo, ante la desaparición o debilitamiento de partidos de izquierda reformistas (comunistas y socialdemócratas), las masas populares, agobiadas por la crisis del sistema capitalista, votan mayoritariamente por partidos derechistas, racistas y nacionalistas, incluso fascistoides.

El ascenso de Donald Trump al poder en Estados Unidos en 2016, refleja ese desesperado intento de demoler el tradicional poder y equilibrio del Congreso, para imponerse como el nuevo emperador del mundo; la presidencia de Jair Bolsonaro en Brasil en 2019, y las victorias electorales de Boris Johnson en Inglaterra en 2019 son los ejemplos más relevantes, de este fenómeno mundial de gobiernos y regímenes bonapartistas que intentan dismantelar las instituciones de la democracia burguesa liberal desde adentro. Esta ya no puede sostenerse en las aguas turbulentas de la crisis económica mundial.

Centroamérica no ha sido la excepción, sino que más bien la confirmación esa tendencia mundial, pero de manera dramática. Después de casi una década de firma y aplicación de los Acuerdos de Paz (1987-1996), las dictaduras militares fueron reformadas y se instauraron frágiles regímenes democrático burgueses en toda la región, con una particularidad: las antiguas guerrillas del FSLN, FMLN y URNG se habían transformados en partidos políticos de oposición (el FSLN de Nicaragua, que había sido gobierno en 1979-1990, pasó a la oposición).

La instauración de estos regímenes democráticos se produjo al mismo tiempo que de desataba la ofensiva neoliberal que privatizó total o parcialmente los servicios públicos, abrió las puertas de par en par al capital transnacional y no pudo contener la infiltración del narcotráfico y la generalización de la corrupción en todos los ámbitos del poder.

La situación en Centroamérica era tan grave, que Estados Unidos promovió la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2006. En sus 13 años de actividad intentó combatir la corrupción y procuró ayudar a la reorganización del Estado. La CICIG fue clausurada en 2019, cerrando un ciclo político: las fuerzas más oscuras de la reacción, que habían sostenido el combate contra la insurgencia, volvieron a recuperar el terreno perdido bajo la presidencia de Jimmy Morales y ahora con Giammattei.

Algo similar ocurrió en Honduras, un país bajo el innegable control de los carteles del narcotráfico. La corrupción en Honduras es tan palpable, que dos presidencias del gobernante partido Nacional (Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández) están vinculadas directamente a la actividad del narcotráfico. (Un hijo de Porfirio Lobo y un hermano de JOH han sido condenados y están presos en Estados Unidos por narcotráfico). La MACCIH fue creada en 2016, después de la presión social ejercida por las multitudinarias marchas de las antorchas en 2015 y, a pesar de sus limitados poderes, dicho convenio no fue revalidado.

En El Salvador, después de que varios expresidentes han sido procesados por corrupción (Francisco Flores, Antonio Saca y Mauricio Funes), Bukele pretende calmar la tempestad con la creación de la CICIÉS, cuyas funciones son mucho más limitadas que la difunta MACCIH.

En Centroamérica estamos presenciando un enorme retroceso de los frágiles regímenes democráticos, creados después de los Acuerdos de Paz, y una restauración del poder de los grupos más derechistas en Guatemala, Honduras y El Salvador, aunque en este país ese fenómeno está disfrazado con el rostro de Nayib Bukele.

En Nicaragua se ha producido un enorme retroceso de las libertades democráticas, con el aplastamiento de la insurrección popular en 2018 e instauración de una dictadura de rasgos fascistas. La derechización se tragó al propio FSLN. En Costa Rica se continúan aprobando leyes que registren derechos democráticos de los trabajadores, ■

EL SOCIALISTA
Centroamericano

ESCA No. 299
Enero 2020

Impresión:
26 de Enero de 2020

DIRECTOR:
Victoriano Sánchez

CONSEJO EDITORIAL:
Armando Tezucún,
Germán Aquino,
Alberto Castro,
Melchor Benavente,
Eduardo Villalobos,
José Manuel Flores Arguijo
(in Memoriam).

DISEÑO Y MAQUETACIÓN:
Ricardo Ruiz

AQUI NOS ENCONTRÁS
www.elsoca.org
facebook.com/elsoca.org
twitter.com/elsoca

Redacción:
elsoca@elsoca.org

Secretariado Ejecutivo:
psoca@elsoca.org

Secciones:
psoca_guatemala@elsoca.org
psoca_salvador@elsoca.org
psoca_honduras@elsoca.org
psoca_nicaragua@elsoca.org
psoca_costarica@elsoca.org

**EL SOCIALISTA
CENTROAMERICANO**
es una publicación del
**PARTIDO SOCIALISTA
CENTROAMERICANO
(PSOCA).**

fundado y reconstituido
el día 4 de Abril del año 2009.

Se publica en dos formatos:
una versión digital que se
actualiza diariamente
(www.elsoca.org) y otra
versión impresa que se publica
quincenalmente.

Los artículos firmados no reflejan
necesariamente la opinión
editorial del **PSOCA**, sino la
exclusiva responsabilidad de sus
autores.



CORRUPCIÓN, MACCIH Y LA NUEVA CARAVANA MIGRANTE

Por Sebastián Ernesto González

En los últimos 10 años y medio, específicamente desde el golpe de estado del 2009, los niveles de corrupción se incrementaron en el país. Al parecer, hubo un pacto entre los grupos fácticos que se aliaron para asestar el golpe a la democracia burguesa. El grupo de liberales liderados por Micheletti y que terminó los 7 meses que le faltaban para gobernar al expresidente Manuel Zelaya, hizo fiesta con el erario y en 7 meses despilfarró ostensiblemente el presupuesto nacional. El Partido Nacional que en alianza de matrimonio con el Partido Liberal recibió el poder en enero del 2010 con Porfirio Lobo a la cabeza, se ha ganado uno de los más altos niveles de corrupción a nivel mundial. Todo lo anterior avalado por el gobierno estadounidense y los organismos internacionales de cooperación. No es de extrañar, estos organismos casi siempre coinciden o se prestan para acatar los lineamientos del imperio norteamericano.

A finales del 2014 salió a la luz pública el asqueroso saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y el pueblo hondureño motivado por la impotencia y el coraje del acto delincencial cometido cuando Juan Orlando Hernández ostentó la presidencia del Congreso Nacional, comenzó a organizarse y pronunciarse condenando tan escandaloso acto. Juan Orlando asumió la presidencia del ejecutivo en el 2014 y ya en el 2015 se le vino encima el movimiento de las antorchas, enormes movilizaciones caminaban en las calles condenando al gobierno corrupto de JOH, exigiendo su salida y solicitando una CICIH, emulando la CICIG de Guatemala. Nuevamente la convulsión social del país hizo que interviniera la Organización de Estados Americanos (OEA) como mediador ante la bola de nieve que crecía.

La creación de la MACCIH

El régimen nacionalista liderado en primera instancia por Porfirio Lobo y luego por JOH, siempre ha tenido el visto bueno estadounidense, es así como a través de la OEA se crea en enero del 2016 la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) que es un ente internacional de cooperación que se creó el 19 de enero de 2016 por medio de un acuerdo firmado en Washington, desechando el deseo original del pueblo que esperaba la creación de



un organismo más frontal contra la corrupción institucionalizada por el régimen.

El régimen nacionalista post golpe llegó para apropiarse del poder y no soltarlos, en 10 años muchos de sus líderes se hicieron nuevos millonarios, los casos de corrupción siguieron sonando por todos lados y la MACCIH fue poco lo que vino a realizar en 4 años. Como maniobra de la OEA solo vino a contribuir para que el pueblo calmara los ánimos y así fue, después de que se ha culminado su vigencia, el pueblo, aunque se acuerda de la enorme corrupción, no se tiene el mismo ímpetu con que se salió a las calles en el 2015.

Aunado a la terrible corrupción alcanzada por Juan Orlando Hernández, se agrega el ataque despiadado a los salarios de los trabajadores públicos y gremiales, así como la eliminación de enormes conquistas sociales. No es casual que en los últimos

años los suicidios se incrementaron enormemente, producto de la terrible crisis económica que asesina mentalmente a los hondureños.

Las caravanas

Antes del 2010, los hondureños que emigraban eran los que no tenían un trabajo estable o que corrían riesgo en su vida personal y familiar. Con la profunda crisis económica de los últimos 10 años, también emigran personas que ostentan con un trabajo bien remunerado, pero con un bajo poder adquisitivo de la moneda absorbido por la terrible inflación y el estancamiento salarial.

La población hondureña se ha visto obligada a emigrar creyendo que en el norte tiene esperanza de al menos conseguir un empleo y, además, tener seguridad, situaciones obligatorias para la existencia y que aquí el régimen se preocupa en destruir. En el 2018 se pusieron en moda las famosas caravanas para emigrar al norte,

el gobierno de Trump rápidamente creó leyes para que no se siguieran motivando las poblaciones latinas para invadir el territorio norteamericano, también crearon en México, Guatemala y Honduras el "País Seguro", mandatos que impone tapones a los que pretenden hacer el tan peligroso viaje. Esto no ha sido motivo para detener a los hondureños y ya el 15 de enero recién pasado salió la primera caravana para el norte.

El pueblo debe movilizarse

El domingo 19 en la ciudad de Tegucigalpa ya se dio una movilización para exigir el combate a la corrupción e implícitamente exigir la salida de JOH. Para obtener nuevamente salarios dignos, empleo y condiciones mínimas de vida, es urgente movilizarse nuevamente de forma organizada y con un plan muy bien estructurado. ■



LA ADMINISTRACIÓN GIAMMATTEI: LA VIEJA DERECHA MILITARISTA SE MANTIENE EN EL PODER

Por *Leonardo Ixim*

El pasado 14 de enero asumió la presidencia de la República Alejandro Eduardo Giammatei Falla y como su vice-presidente Cesar Guillermo Castillo Reyes, postulados por el partido Vamos por una Guatemala Mejor (VAMOS), al derrotar al binomio presentado por el partido Unión Nacional de la Esperanza (UNE) conformada por Sandra Julieta Torres Casanova y Carlos Raúl Morales por una diferencia de 523,689 votos en la segunda vuelta, obteniendo VAMOS 1,907,801 votos y la UNE 1,384,111 votos respectivamente.

Al igual que el gobierno saliente de Morales -del cual Giammattei se ha querido distanciar- la bancada oficialista con solo 17 curules presidirá la Junta Directiva del Congreso, gracias a la formación de un bloque con los partidos de derecha quienes fueron los mismos que respaldaron gobierno saliente y cuyos mismos pasos parece que Giammattei seguirá.

Giammattei, después de cuatro intentos, logró la presidencia postulado con anterioridad por partidos que ya no existen; de hecho el partido actual es una armazón ligado a los intereses personales de él y los del vice-presidente, del cual se señala tienen diferencias en lo que respecta a ver quién controlará la bancada oficial.

Sin embargo, es un político conocido, pues fue director del Sistema Penitenciario en el gobierno de Oscar Berger entre 2005-2008, gobierno cercano a los intereses de los núcleos de la oligarquía. Giammatei es señalado junto a los altos jerarcas del Ministerio de Gobernación de ese momento, quienes han estado o están en distintos procesos penales de parte del Ministerio Público y la desaparecida

CICIG, por ejecuciones extra-judiciales; de hecho, el nuevo presidente ya guardó prisión por esos delitos durante 10 meses, y fue liberado por falta de pruebas.

Se endurece aún más el régimen

Con la firma de los Acuerdos de Paz y como parte de la llamada apertura democrática, la izquierda ilusamente buscó reformar el Estado



para promover una democracia liberal, así como una serie de reformas institucionales en todas las áreas, la aplicación de un modelo de distribución limitado de la tierra, entre otras cosas. Dentro de eso -aunque con atraso- estuvo la instalación de la CICIG apoyada por Naciones Unidas para hacer funcionar el estado de derecho, afectando a una serie de intereses políticos y empresariales que se salían de ese marco, usando la corrupción y la impunidad como forma de acumulación.

Esos espacios por su parte se han ido cerrando y con más fuerza a partir del tercer año del gobierno de Morales. Esto nunca implicó que hubiera una transformación real de la naturaleza de clase del Estado en todo este periodo, a diferencia de lo que muchas instancias civiles creen, diciendo que se perdió el control de ciertas instituciones.

Por otro lado, con Giammatei se

siguen reciclando una serie de figuras, muchas provenientes del ejército, que han estado en todos los gobiernos de la era "democrática" pero con mayor presencia desde el gobierno del desaparecido Partido Patriota. Ahora nutridos con otra serie de elementos que ya estuvieron en el gobierno de Berger con nexos a los grupos más recalcitrantes de la oligarquía local.

Un ejemplo del endurecimiento del régimen es la primera medida tomada por el nuevo gobierno, la de instalar un estado de prevención por siete días en los municipios de Mixco y San Juan Sacatepéquez que son parte del área metropolitana central. Argumentando la necesidad de combatir la delincuencia, pese a estar estos municipios entre los que menor índice de hechos delictivos tienen en el Departamento de Guatemala.

Recordemos además que en el segundo municipio hay una resistencia desde hace años de parte de las comunidades Kaqchiqueles-Mayas contra la instalación de una planta cementera de la empresa Cementos Progreso de parte del grupo oligarca Novela.

Con ese estado de prevención se limitan los derechos de organización y libertades básicas. Esta medida consideramos es un plan piloto de parte de las fuerzas de seguridad para realizar control territorial bajo la excusa del combate a la delincuencia. Pues el nuevo partido gobernante tiene entre sus prioridades destruir las resistencias de las comunidades mayas y mestizas contra los proyectos extractivistas que afectan sus territorios.

Esto se traduce en el nuevo gabinete: el ministro de Gobernación será el ex general Edgar Godoy Samayoa parte de la promoción 73 de la Escuela Politécnica, la misma



del ex presidente y reo Otto Pérez. Godoy fue un oficial de inteligencia parte del desaparecido Estado Mayor Presidencial en el gobierno de Jorge Serrano y posteriormente trabajó en la Municipalidad de la Ciudad de Guatemala con el ex presidente Álvaro Arzú y su Partido Unionista, el cual estuvo a cargo de un centro de espionaje junto al prófugo Luis Mendizábal por el caso La Línea, denominada "La Oficinita".

En el Ministerio de la Defensa Nacional estará Juan Carlos Alemán Soto, general de brigada quien ha sido titular ante la Junta Interamericana de Defensa en Washington, hombre de confianza del Departamento de Defensa de esa potencia y es piloto aviador de la promoción 111.

Otra cercana a círculos militares es la nueva ministra de educación Claudia Ruiz Casasola de Estrada una funcionaria de carrera de ese ministerio, casada con el coronel de infantería Julio César Estrada Valenzuela, hermano de Luis Estrada Valenzuela, acusado por la Cicig por el robo de Q470 millones del Ministerio de la Defensa en 2001.

Por su parte hay una serie de ministros ligados al sector empresarial oligárquico y emergente. Iniciando con el nuevo ministro de Economía Antonio Maluf ex presidente de la gremial de empresarios, CACIF. Álvaro Gonzales Ricci, ministro de Finanzas Publicas, ex diputado del partido CREO, ha trabajado para el CITIBANK y en corredoras de bolsa para grandes empresas en Guatemala. Así como el nuevo ministro de Relaciones Exteriores Pedro Brolo, quien fue funcionario de la OEA en Honduras tras el golpe de Estado contra Manuel Zelaya y terminó avalándolo.

De parte de sectores emergentes de la burguesía, se encuentra en Energía y Minas Alberto Pimental Matta, quien ha sido accionista en una empresa llamada FERSA, con contratos

sin cumplir con el Estado en materia de instalación de tendidos eléctricos y fue financista del partido VAMOS. En el Ministerio de Comunicaciones,



Infraestructura y Vivienda, José Cifuentes Lemus, accionista de otra empresa contratista del Estado en materias de mantenimiento vial llamada Ingeniera y Construcciones. En Agricultura, Ganadería y Alimentación, ex gerente de la empresa GanAgro, S.A dedicada a la exportación de flores. En Ambientes y Recursos Naturales Mario Rojas, ex presidente de la Cámara de Comercio en el departamento de Santa Rosa. Esto serían solo algunos nombres.

El Nuevo Congreso

Pese al intento de la bancada UNE de controlar la Junta Directiva del Congreso, ésta no lo logró. Para eso se estableció una alianza con bancadas de diversas ideologías, como PAN y CREO de derecha, Bienestar Nacional y Semilla de centro y algunas de izquierda como URNG y Winaq en una alianza que las bases de esos partidos deberían evaluar. Estas bancadas llegaron a un acuerdo en función de aprobar algunas leyes de carácter progresistas como la de Aguas o reformas a la ley Electoral y de Partidos Políticos obteniendo 72 votos. La UNE cuenta con 52 diputados, pero seis diputados votaron por la planilla oficialista, debilitando esta propuesta, siendo catalogados por traidores por ese partido.

Como mencionamos, se impuso

el partido de gobierno con el apoyo de partidos de la más rancia derecha de este país, obteniendo 82 votos. Así, la Junta Directiva del primer año de la novena legislatura estará conformada por, Allan Rodríguez Reyes como presidente, electo por VAMOS quien ha sido contratista del Estado en lo respecta a construcción de obra pública. Primer Vicepresidente será Sofía Hernández Herrera, quien fuera diputada electa por LIDER en 2015, ahora reelecta por la UCN partido vinculado a casos de narcotráfico y cuyos hijos Karla y Erick Martínez Herrera también fueron diputados electos por la

UCN. A ellos se les vincula de tener nexos con narcos del departamento de Huehuetenango, fronterizo con México.

Segundo vice-presidente, Luis Rosales Marroquín, ex diputado del desaparecido FRG y del partido VIVA, ahora electo por VALOR, ha sido abogado del genocida Efraín Ríos Montt y es muy cercano a la hija de éste, Zury Ríos candidata por VALOR en las recientes elecciones. Tercer vicepresidente, Armando Castillo Álvarez electo por VIVA, también ha sido contratista del Estado y fue director de la Unidad de Ejecutora de Conservación Vial en el gobierno saliente. Primer Secretario, Felipe Alejos Lorenzana, reelecto por el partido Todos, una de las figuras que respaldaron a Morales y es investigado por delitos de defraudación fiscal por el MP.

Segunda Secretaría Rudy Perrería, diputado tráfuga de la UNE y LIDER y ahora electo por el FCN-Nación; Tercer Secretaría Douglas Rivera Mérida, diputado electo por el Partido Humanista. Cuarta Secretaría Hernán Moran Mejía, electo por Prosperidad Ciudadana y quien ha sido también tráfuga de la UCN, LIDER y el FCN-Nación. Quinta Secretaría Carlos Nájera Sagastume electo por la UNE, uno de los traidores de ese partido y quien también ha sido integrante de la UCN, FRG y Todos. ■

INSUFICIENTES REFORMAS ELECTORALES Y MANIOBRAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Por German Aquino

En el 2021 se realizara el proceso electoral en donde la ciudadanos podrán elegir a los 84 diputados que conforman la Asamblea Legislativa y los 20 diputados que integran el parlamento Centroamericano (PARLACEN), así mismo se elegirán los 262 Alcaldes y sus Concejos Municipales pluralistas.

En función de lo anterior y para dar cumplimiento a una resolución de la Sala de lo Constitucional los diputados han realizado una serie de reformas las cuales han llevado a contradicciones entre el órgano legislativo y el gobierno de Bukele.

Superación de Veto presidencial referente a fotografía de Alcaldes

Después de varias discusiones al final los diputados terminaron aprobando una reforma al Código Electoral la cual permitirá que aparezca la fotografía de los candidatos a Alcaldes en las papeletas de votación para las elecciones que se realizaran en el 2021.

Lo anterior no gozo con el beneplácito del presidente Bukele y fue vetado, argumentando aspectos jurídicos y presupuestario refiriendo que dicha reforma es "Es inconstitucional porque no existe una razón que justifique de manera razonable y proporcional que el candidato a alcalde por un partido político..., sea el único que de aquellos que conforman la planilla de candidatos a Concejales Municipales de determinada locación, que sea referenciado por el votante por medio de la inclusión de su fotografía en las papeletas de votación que correspondan a cada circunscripción electoral municipal...". (EDH. 20/11/19).

Ante el veto presidencial los diputados en su mayoría hacen unidad

y lo superaron. Al respecto Julio Fabián diputado de ARENA manifestó que "...Es lamentable la posición del gobierno en vetar una reforma que no nace del seno de la Comisión de Reformas Electorales, sino que es dándole seguimiento a una sentencia de la Sala de lo Constitucional cuando mandató que todos los funcionarios



deberían ser electos por rostro. Lo que más lamento es que hace exactamente un año el partido de él propuso que incluso se votara por rostro para la Presidencia, es bastante contradictorio porque no va en coherencia con lo que se propone en su momento a lo que por hoy se está vetando. Hubo una propuesta que vino de las esferas de su partido cuando él era candidato a la Presidencia que se pusiera el rostro". (EDH. 20/11/19).

Estamos ante una reforma a medias la cual aunque incorporará la fotografía de todos los candidatos a Concejales de los diferentes partidos políticos no asegura la plena participación de todos los sectores a nivel nacional.

Para una verdadera democracia a nivel municipal deberían existir las candidaturas no partidarias para Alcalde y Concejo Municipal debiendo establecerse requisitos que sean fáciles de cumplir para que desde las diferentes organizaciones puedan proponer a sus respectivos candidatos.

el exterior

Según proyección de población actualizada por la DIGESTYC "...Para el año 2015 se estima un aproximado de 3,100,506 compatriotas residen en el exterior... lo que representa una tercera parte de la población total de El Salvador que, para el mismo año, se estima en 6,401,415 habitantes....del total de salvadoreños y salvadoreñas en el exterior, el 93.5 % vive en Estados Unidos, concentrados mayoritariamente en ciudades de los estados de California, Texas, Nueva York, Maryland, Virginia y Washington D. C. El 2.7 % se encuentra viviendo en Canadá y el restante 3.8 %, reside en diferentes países alrededor del mundo, principalmente en Australia, España, Italia, México, Guatemala, Costa Rica, Belice y Honduras." (Política Nacional para la Protección y desarrollo de la Persona Migrante Salvadoreña y su Familia. Julio 2017. El Salvador).

Existe una considerable población salvadoreña residentes en el exterior es por ello que finalmente la Asamblea Legislativa en enero del 2012 los Diputados terminaron aprobando la Ley Especial para el Ejercicio del Voto desde el Exterior (Levex), con lo cual se otorga el derecho al sufragio a los salvadoreños en el exterior bajo la modalidad de voto postal. Dicha ley si bien signifió un avance pero limitaba el sufragio sólo a nivel de elecciones presidenciales.

Según el Tribunal Supremo electoral en las elecciones presidenciales del 2019 el total de personas en el padrón electoral era de 5,268,411 del cual 5,262,463 correspondía a personas del padrón electoral nacional y 5,948 a salvadoreños empadronados para votar desde el exterior.

Para el mismo año se estimaba que de 300,000 salvadoreños que viven en los Estados Unidos de Norte América y "...que cuentan con su DUI vigente, solo unos 1,200 han querido empadronarse..." (EDH. 08/05/2018).

Engorroso proceso de registro en



Diputados niegan derecho para elegir Alcaldes y concejos municipales

El 16 de enero del presente año fue aprobado por la Asamblea Legislativa con 74 votos una reforma a la Ley Especial para el Ejercicio del Voto en el Exterior mediante la cual los salvadoreños en el exterior además de ejercer el sufragio en las elecciones presidenciales puedan hacerlo en las elecciones de diputados a la Asamblea Legislativa y al Parlamento Centroamericano (PARLACEN).

El diputado Roberto Ángulo (PCN) al respecto manifestó: "No es fácil conseguir un respaldo en un tema tan complicado, 74 representantes legítimos del pueblo le han dado el apoyo a este avance político, complicado y delicado, en esta Asamblea se han tomado muchas decisiones en las cuales algunos sectores o algún Órgano del Estado tiene diferencia con nosotros, aquí es el arte de acercarnos lo más posible en beneficio de nuestro pueblo, de fortalecer el sistema democrático que tanto ha costado" <https://www.asamblea.gob.sv/node/9918>.

Los diputados de los diferentes partidos políticos representados en la Asamblea legislativa continúan negándoles el derecho al sufragio a nivel municipal a los salvadoreños en el exterior.

Posiciones encontradas

Mario Ponce presidente de la Asamblea Legislativa no firmo el dictamen por considerar "que habían elementos que se podían afinar. Hay una diferencia entre el voto postal y el voto electrónico; debimos tomar en cuenta los planteamientos del Ejecutivo. No estoy en contra del voto en el exterior". (<https://www.asamblea.gob.sv/node/9918>). Con dicho posicionamiento Ponce abandera las propuestas del Ejecutivo quien había propuesto que el voto en el exterior fuera de forma electrónica y que se extendiera también a las elecciones municipales.

La aprobación de dicha reforma

no contó con el aval del gobierno de Bukele quien manifestó: "...Me mandan un adefesio jurídico a Casa Presidencial, porque si no lo sanciono es la culpa del presidente que no pueda votar la diáspora (...) pero no, lo vamos a vetar... El veto, indicó, se hará por la inconstitucionalidad de las reformas,... En su veto, concluyó, incluirá tres argumentos para comprobar la inconstitucionalidad de las reformas: la Asamblea no autoriza el voto para las elecciones municipales, no se permite el voto pasivo o postularse a cargos públicos, y viola el derecho real para votar, por "no establecer un sistema accesible". (DEM. 23/01/2020).



Todos buscan sacar provecho

René Portillo Cuadra del partido ARENA considera que la no extensión de la reforma a nivel municipal, no significa que sea inconstitucional debido a que: "la sentencia de la Sala de lo Constitucional 156-2012, dice: dicho mandato puede cumplirse de manera progresiva según lo disponga la ley...", a la vez misma alaba la propuesta del Ejecutivo pero lamenta que fue presentada a tardíamente.

Bukele busca maniobrar proponiendo desistir del voto electrónico por el voto postal a cambio de que se extienda el derecho al sufragio a nivel municipal, a la vez misma deja al descubierto la verdadera razón por la cual abandera la extensión de la reforma, manifestando: "...hay un pacto de Arena y el FMLN para bloquear el voto de los salvadoreños en el exterior...Ellos

saben que tienen esferas de influencia, pero es muy difícil comprar el voto de la diáspora. Ese puede ser su temor" (DEM. 23/01/2020). Precisamente es el voto de la diáspora el que como gobierno central busca atraerse para las próximas elecciones.

Es tiempo de terminar con la partidocracia

Diferentes organizaciones han presentado propuestas de reformas electorales para democratizar el régimen, dichas propuestas terminan siendo deformadas por los diputados y al final terminan reflejando los intereses de los partidos políticos.

Cuando las reformas electorales son derivadas de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, como el caso de las dos últimas señaladas, estas se enmarcan en la progresividad con lo cual basta demostrar que se está haciendo algo.

La mayor parte de las reformas realizadas en materia electoral no han logrado democratizar el antidemocrático sistema político electoral consagrado en la reaccionaria Constitución de 1983, por lo cual es necesaria la convocatoria a una Asamblea Nacional

Constituyente.

La participación en los asuntos del Estado o en la política no es asunto solo de los políticos o de los partidos políticos, sucede que los partidos políticos lo han monopolizado es por ello que imponen requisitos de difícil cumplimiento a las candidaturas independientes para diputados y en los otros casos las limitan. Es por ello que las diferentes organizaciones y sectores sociales no pueden presentar sus propuesta para cargos de elección popular.

Para que existan leyes que expresen los intereses de las grandes mayorías y de todos los sectores es necesario que además de los diputados, también los ciudadanos tengan iniciativa de Ley para ello se trabajar en una propuesta de Ley de iniciativa Popular de Ley.

EL MODELO CONCESIONARIO HONDUREÑO: MAL QUE AUN SOSTIENEN LOS PARTIDOS TRADICIONALES

Por Andrés Morales

Conceder el territorio y sus recursos a extranjeros: un pasado vergonzoso en la historia de Honduras, imposible de olvidar

La historia política hondureña de principios del siglo XX, coloca en un lugar sumamente complicado a las organizaciones partidarias de mayor tradición: en este caso al Partido Liberal y al Partido Nacional; quizá por ser estas organizaciones las encargadas de promover el llamado sistema concesionario.

El modelo concesionario tiene sus orígenes en Honduras, precisamente en 1906, cuando Manuel Bonilla aun ostentaba su periodo de gobierno; años en que las compañías fruteras comenzaban a disputarse las zonas costeras de este territorio. Tal parece que el modelo de civilización occidental fue el horizonte trazado por los liberales del siglo pasado.

El sistema concesionario, al cual ya estaba habituado el gran capital bananero en Costa Rica y Guatemala, que ligaba la construcción de líneas férreas con la dotación de tierras en usufructo para que se dedicaran al cultivo del banano en gran escala, solo se inició en Honduras en 1906 con el presidente Manuel Bonilla, un político liberal que se había visto gratamente impresionado por los avances que en materia de crecimiento económico estaba experimentando el litoral norte con el cultivo del banano.

Las décadas subsiguientes demostraron que la política de

conceder territorio a varias compañías extranjeras, sería una norma y no excepción. Las administraciones de los partidos políticos tradicionales continuaron sin cuestionarse la

única forma de generación de energía bajo el régimen de concesiones a capitales extranjeros.

Las comunidades cercanas a estos proyectos tienen visiones distintas del modelo civilizatorio de los estados nacionales, y tienen presente el daño ambiental que ocurre si una hidroeléctrica es instalada cercana a sus territorios, Esperanza Martínez apunta lo que sigue entorno a estos daños.

... se interrumpe el cauce del agua y se afecta a las especies subacuáticas.



entrega expresa del territorio a formas más sofisticadas de extractivismo. La minería, que fue quizá una de las primeras formas de extracción de minerales en territorio hondureño dio paso a grandes concesiones en las costas del país a compañías fruteras, y éstas a su vez cedieron el paso hace apenas algunas décadas atrás, a las concesiones de vastos territorios para la generación de "energía limpia" a compañías vinculadas a hidroeléctricas.

Uno de los casos más emblemáticos lleva por nombre Patuca III, una hidroeléctrica construida con capital chino, de la empresa SINOHYDRO. Este proyecto fue promovido por el actual gobierno nacionalista, y presentado originalmente en un gobierno anterior liberal previo al año 2009. El sistema concesionario, arrastrado desde ya hace un siglo, es sostenido inclusive por el congreso nacional, que a través de "decretos de emergencia" promovidos por las representaciones de los partidos tradicionales, justifica el modelo económico extractivo como

En las zonas donde se instala una hidroeléctrica, vertientes y ríos son desviados, enclaustrados en túneles o ductos a lo largo de kilómetros, dejando a muchas familias campesinas sin agua para sus actividades.

En la mayoría de los casos que tienen que ver con la instalación de hidroeléctricas o mineras en comunidades de varios departamentos o municipios del país, se impone una única visión: la del Estado. No sobresalen las propuestas que muchas comunidades campesinas e indígenas hilvanan a través de asambleas comunitarias, cabildos abiertos, entre otras formas de decisión comunitaria. Tatiana Roa Avendaño y Danilo Urrea suponen que:

...es imposible generar modelos de gestión públicos y sustentables sin tener una concepción amplia del territorio como sistema integral para la reproducción de la cultura y la defensa y cuidado de las fuentes y cuencas hídricas.



Por una política ambiental que se desligue de la tradición antiecológica de los partidos políticos tradicionales hondureños

La concepción amplia del territorio como sistema integral, tal como lo expresan los autores anteriores, no ha sido específicamente un tema de vital importancia en los programas de gobierno de los partidos tradicionales. Una propuesta concreta que proviene de la ecología política atraviesa todo el sistema de pensamiento occidental replicado por las corrientes liberales del siglo XIX, convertidas en partidos políticos en el transcurrir del XX, herencia que persiste y no ha sido rota. Si emerge de los movimientos sociales una propuesta política que sostenga una ética distinta a la del libre mercado, es más que necesario que asuma lo que Enrique Leff sugiere como objetivos de la ecología política.

Más que actuar en el espacio de una complejidad ambiental emergente, [la ecología política] se inscribe en la búsqueda de un nuevo proyecto libertario para abolir toda relación jerárquica y toda forma de dominación. Más allá de estudiar los conflictos ambientales, está constituida por un conjunto de movimientos sociales y prácticas políticas que se manifiestan dentro de un proceso emancipatorio. La ecología política se funda en un nuevo pensamiento y en una nueva ética: una ética política para renovar el sentido de la vida.

Un proyecto político emancipatorio asumido por los movimientos sociales y demás agrupaciones conscientes de las políticas antiecológicas y la profundización del modelo

concesionario por los partidos de tradición liberal, debe poner por delante la crítica a las distintas opresiones que se viven fuera de las ciudades capitales y el ámbito urbano, como ser la opresión expresa contra las mujeres campesinas, indígenas y afro, explotadas doblemente en el campo. Rita Segato propone lo que sigue entorno a este planteamiento:

...es necesario introducir en la retórica jurídica y en la consciencia

Liberal, y el estudio de los programas políticos afines a una economía extractiva, es una tarea que pretende asumir este ensayo en próximos borradores.

Notas

Enrique Leff, La ecología política en América Latina. Un campo en construcción, En publicación: Los tormentos de la materia. Aportes para una ecología política latinoamericana. Alimonda, Héctor. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires. Marzo 2006.

Esperanza Martínez, "El agua limpia y libre es agua bendita. El agua en el centro de los conflictos ambientales en Ecuador", en Alberto Acosta y Esperanza Martínez (comp), Agua. Un derecho fundamental, Quito: Edi. Abya-Yala, 2010).

Mario Posas, "La plantación bananera en Centroamérica (1870-1929)", en Edelberto Torres Rivas Coord., Historia

General de Centroamérica tomo IV. Las Repúblicas agroexportadoras (1870-1945), España: Ediciones Siruela, S. A., 1993.

Rita Segato, "Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres".

Tatiana Roa Avendaño y Danilo Urrea, "Aguas en movimiento. Culturas y derechos", en Alberto Acosta y Esperanza Martínez (comp), Agua. Un derecho fundamental, Quito: Edi. Abya-Yala, 2010).

Imagen principal fue tomada del siguiente sitio:

<https://copinh.org/2018/07/gobierno-y-empresarios-promueven-cuarto-congreso-de-mineria-en-honduras/>



de la opinión pública la centralidad y el significado de las formas nuevas de victimización del cuerpo femenino en las estrategias de manutención de un orden basado en la dominación arbitraria y soberana sobre la vida de las personas y sus territorios. Localizar y desarticular este dispositivo de dominio es una tarea urgente.

Es necesario replantear el bipartidismo en Honduras, su papel en las políticas ancladas en la matriz energética extractivista y el modelo concesionario. Un siglo entero de continuidad de un modelo económico dependiente que repercute en la actualidad en formas no vistas de represión, como el asesinato de líderes indígenas y campesinos, es lo que define a la historia social y política hondureña. Los roles, asumidos por los dos partidos tradicionales Nacional y



CONFLICTOS, ATAQUES MILITARES Y LUCHA ANTIIMPERIALISTA EN IRAK E IRAN

Por Youssef El Maldí

El reciente asesinato del general iraní Qasem Soleimani y del vicepresidente de la milicia chiita Multitud Popular en Iraq, Abu Mahdi al Mohandes, por parte del gobierno de los Estados Unidos pone en evidencia los métodos de terror que emplea el imperialismo para combatir a sus enemigos.

La justificación dada por la administración Trump ha sido que este asesinato es la respuesta a una escalada de ataques. El primero fue perpetrado por las milicias pro iraníes a una zona ocupada por las fuerzas yanquis matando así a un empresario yanqui sub contratista. En respuesta a esto, los Estados Unidos bombardearon las bases de las milicias del Hezbola. En respuesta a esto, las masas toman la embajada yanqui. Todo esto acaba con el asesinato del general Soleimani.

Una vez más, la tecnología de punta al servicio del imperio ha permitido este salvaje ataque en contra de uno de los más importantes militares del régimen de Teherán. Soleimani ha sido clave por su rol en los diferentes conflictos que ha tenido que enfrentar Irán a lo largo de los últimos tiempos. Uno de sus labores fue la coordinación entre los distintos aliados del estado iraní en Siria e Iraq y sus fuerzas armadas Los Guardianes de la Revolución. Esto lo convirtió en un objetivo militar de primer orden.

Luego de la invasión yanqui a Iraq en el 2003, la camisa de fuerza que encerraba de manera dictatorial el régimen de Husein a las diferentes nacionalidades se destapó. Esto no es del agrado de las burguesías locales y

menos de las burguesías imperialistas que apostaron por diferentes tratados para lograr su cometido de dominación sobre estas importantes reservas de recursos naturales, en este caso, los hidrocarburos.

El balance de víctimas en este periodo es espeluznante. Más de un

del mundo. Las minorías étnicas fueron elevadas al rango de aliados de los ocupantes y las mayorías a sufrir el yugo de la ocupación.

Las movilizaciones en Iraq: la contestación contra el gobierno pro iraní



Desde finales del año pasado, las masas iraquíes han salido a la calle para protestar por la degradación de sus condiciones de vida y de la creciente corrupción producto de la implosión del estado nacional. Este régimen pro iraní ha sido principalmente cuestionado y enfrentado por las masas

millón de iraquíes ha perecido desde ese año hasta entonces.

Hace cien años, el tratado Sykes Picot entre las potencias vencedoras de la primera guerra mundial crearon los Estados que conocemos en la actualidad bajo la denominación de protectorados. Estos protectorados, ingleses y franceses, desmembraron el derrotado imperio Otomán y crearon Siria bajo la tutela francesa, Irak, bajo la tutela inglesa y crearon algunos otros estados artificiales para mejor dividir como el Líbano, donde la minoría católica maronita se alió con la potencia ocupadora para oprimir a las mayorías de origen chií y establecer un régimen reaccionario que estallo durante la guerra civil de los años setenta. En el resto del área, la formula colonialista fue la misma que se aplicó en el resto

fundamentalmente de la comunidad chií mayoritaria del sur del país, en donde se han producido las mas importantes movilizaciones. Esto no ha impedido que los miembros de la comunidad sunita también se hayan unido a la protesta. Esta ola de movilizaciones evidentemente ha puesto en peligro el estatus quo organizado por las potencias imperialistas con la venia del régimen de los ayatolas.

« El año pasado, el gobierno iraquí se negó a cumplir con las nuevas sanciones económicas de Estados Unidos contra los sectores energético, marítimo y bancario de Irán. Bagdad anunció su negativa después de que el presidente iraquí Barham Salih visitara Teherán, donde discutió con su homólogo iraní, Hassan Rouhani, las formas de reforzar los lazos bilaterales,



así como el posible establecimiento de zonas de libre comercio a lo largo de su frontera común. »(<https://israelnoticias.com/medio-oriente/irak-milicias-chiitas-iran-ejercito/>)

El balance ha sido bastante sangriento. Cerca de 300 personas fueron asesinadas y alrededor de 12000 más fueron heridas. Esta represión fue orquestada por las fuerzas del régimen, pero también por las milicias pro iraníes, de las cuales Soleimani y Al Mohandes eran los jefes indiscutibles.

Esta milicias se han ido formando en el contexto de la lucha contra DAESH. Las Fuerzas de Movilización Popular cuentan con cerca de 140 000 milicianos. Tienen un armamento que incluye vehículos blindados y armamento de todo tipo.

“El parlamento iraquí le dio reconocimiento oficial al PMF como “unidades autónomas” del ejército iraquí y le asignó un fabuloso presupuesto de 2.160 millones de dólares. Los tres principales grupos que conforman estas fuerzas, el Hezbollah, Asaib Ahl al Haq y las Brigadas Badr, tienen a su vez representación parlamentaria. infobae.com 4/1/2020 »

Pero el poder de estas milicias no llega hasta ahí. En un aspecto vital como lo es el control del espacio aéreo, esta se perfila como un competidor al dominio de los cielos por parte de los yanquis.

“Hasta tal punto ha llegado el poder de estas milicias y el apoyo de la clase política iraquí que Faled al Fayah (comandante en jefe de la milicia y asesor de seguridad nacional iraquí) ha iniciado a través de Abu Mahdi al Mohandes (jefe adjunto de la milicia) la creación de una fuerza aérea para la Coalición de las Fuerzas de Movilización Popular con prerrogativas dadas por el Primer Ministro iraquí atendiendo al interés público del pueblo de Irak sometiéndose a la orden N°79 de 2014. Esto da a Salah Mahdi Hantoush la responsabilidad sobre la nueva unidad aérea. Otralectura.com 8/09/2019”

Estas manifestaciones también tenían como eje rechazar la presencia de las tropas yanquis que a pesar del repliegue anunciado en 2012 por la

administración Obama, no ha llegado a ser efectivo en su totalidad.

« En la actualidad, Estados Unidos tiene más de 5.000 soldados en Irak que han desempeñado un papel decisivo en la liberación de las principales ciudades de ISIS. Las milicias, leales a Irán, son hostiles a las fuerzas estadounidenses. En mayo, el secretario de Estado estadounidense de visita, Mike Pompeo, dijo a los líderes iraquíes que si no ejercían más control sobre los combatientes de la milicia, Washington respondería con fuerza. »(<https://israelnoticias.com/medio-oriente/irak-milicias-chiitas-iran-ejercito/> 3/07/2019)

Las reacciones por parte de las diferentes potencias luego del inicio de las movilizaciones fueron tardías y escuetas. Las primeras reacciones de la Casa Blanca se dieron cerca de cuarenta días después que las manifestaciones empezaran, lo que denota que las movilizaciones no son la taza de té preferida de la burguesía imperialista. El mismo Ministro de Asuntos Exteriores francés, Yves Le Drian, estando de visita en el territorio iraní en el mes de octubre fue incapaz de pronunciarse sobre la represión ejercida por las fuerzas policiales y las milicias en contra de los manifestantes.

Por su lado, el ayatola Khomeini, han ido en el sentido de denunciar las manifestaciones como un complot contra Iraq y así poner en tela de juicio la legitimidad de las manifestaciones. Esta retorica utilizada por los gobiernos burgueses para justificar luego la represión no tiene ningún sentido. En el caso iraquí, la mayor parte de los manifestantes son jóvenes nacidos luego de la invasión yanqui en el 2003. El desempleo, la falta de educación y la escasez de oportunidades han sido el detonante.

Irán, una nueva potencia en el Medio Oriente, busca afianzarse en el tablero internacional

Luego del triunfo de la revolución iraní, dirigida por los ayatolas, las contradicciones con el imperialismo yanqui no se hicieron esperar. El régimen del Sah, aliado incondicional del imperialismo fue derrocado por

esta nueva burguesía que implementó un estado confesional.

La guerra civil en Siria ha sido un elemento que le ha permitido al régimen de Teherán de buscar ampliar su influencia.

En este terreno, la puerta se abrió para que varias potencias del área jugaran un papel protagónico, empezando por Rusia que buscaba a toda costa mantener su base naval en el Mediterráneo y torcer el brazo al rival norteamericano. El apoyo incondicional de los rusos a la dictadura de El Asad fue determinante para alzarse con el triunfo. Pero un activo protagonista fue Irán. Miles de combatientes iraníes fueron a engrosar las milicias que enfrentaron a los rebeldes y al Estado Islámico. Por otro lado, las milicias de Hezbollah sostenidas y financiadas por Irán pusieron también a sus hombres a combatir al lado de la dictadura.

Los iraníes y los rusos no han sido los únicos que han tomado ventaja en esta situación. Los turcos aprovecharon la coyuntura para avanzar y tomar la ciudad kurda de Afrin, lo que ayudó también a consolidar al electorado nacionalista fiel a Erdogan. Cabe recordar que las bases militares turcas, miembro de la OTAN han sido estratégicas para las intervenciones militares yanquis en la región. El reciente acuerdo ruso otomano para intervenir y patrullar en norte de Siria es un elemento más en esta dirección.

La “real politik” de las autoridades iraníes es bastante concreta. Luego de las primeras intervenciones militares rusas en Siria declaraban que “la intervención de las fuerzas de Putin como “razonables y pragmática” para más adelante señalar que “ si la iniciativa político militar rusa con el apoyo de Teherán logra la colaboración de los países de la región y de la comunidad internacional, será la única solución para salir del impasse” (Courrier International n°1301). Esta caracterización se vio confirmada por la realidad. Las fuerzas del régimen del El Assad en conjunto con las fuerzas rusas pudieron aplastar y masacrar prácticamente a la rebelión . Los otros países imperialistas solo confiaron el rol de gendarme a las fuerzas rusas



apoyadas también por las milicias chiís y el ejército turco por el norte.

La región no deja de tener múltiples conflictos como el de Yemen, donde se enfrentan las fuerzas huties influenciadas por Teherán combaten al régimen apoyado por la monarquía wahabita de Arabia Saudita. En ese país por ejemplo las poblaciones de origen chií representan en Arabia Saudita entre un 12 a un 20 por ciento. Pero las mayores reservas y la más grande cantidad del tráfico de petróleo transita por sus territorios. De ahí la importancia para los saudíes para mantener el control en la península. Una crisis militar o política de mayor envergadura, podría hacer que los precios del petróleo se fueran por las nubes. La producción de Arabia Saudita equivale a unos 103,3 millones de barriles al día. Si esta producción se detuviera por varios días, el precio podría llegar a los 200 dólares o más. (TheDaily Telegraph 4/01/2016).

Los ataques contra los pozos petroleros en el territorio saudí no han sido en vano. El objetivo es dañar la infraestructura de su principal enemigo en el área que a su vez mantiene sus pretensiones imperiales en distintos escenarios como en el norte de África, siendo Libia uno de sus principales teatros de operaciones militares sin contar el conflicto en la península.

El antiguo presidente del gobierno ruso, Boris Medved, declaraba con respecto al conflicto en Siria " Debemos preservar a Siria como un estado unido y evitar su disolución... el mundo no podría sobrevivir otra Libia, Yemen o Afganistán. Las consecuencias de este escenario serian catastróficas para el Oriente Medio. La implementación de estas medidas debe ser conducidas por Rusia y los Estados Unidos. Quiero hacer énfasis en que la clave es el trabajo diario de los militares de Rusia y Estados Unidos. Hablo de un trabajo regular ...trabajo diario, el trabajo de todos los días" (Voltaire Network 13 de febrero de 2016)

Existen otros ejes en donde la rapiña de las grandes potencias imperialistas y las potencias imperialistas de segundo orden buscan afianzar sus posiciones

en vista de ganar influencia estratégica sobre todo en el Mediterráneo y en el Oriente Medio. Este es el caso de Libia donde casi todos los actores presentes en Iraq, Siria y Yemen se encuentran aliados o enfrentados en los dos bloques que se disputan el poder en el país, que recordemos posee las más grandes reservas de petróleo en el continente africano.

"Las partes que combaten en la guerra civil libia solo pueden luchar entre sí porque reciben apoyo militar del extranjero. Tenemos que detenerlo



para que Libia no se convierta en la nueva Siria", ha considerado el ministro de Exteriores alemán Heiko Maas el domingo. El borrador del texto que el domingo se negocia contempla en su punto seis que "nos comprometemos a abstenernos de interferir en el conflicto armado de Libia y exigimos a todos los actores internacionales a que hagan lo mismo", según el texto filtrado a la prensa alemana. (El País 19/01/2020)

¿La tercera guerra mundial?

Es claro que la perspectiva de un conflicto a gran escala no aparece al orden del día por el momento. Los ataques y contra ataques de las diferentes potencias no dejan ver que esa salida sea la que privilegian por el momento.

Los factores políticos son los que priman para que esta situación no se dé. Aun con el auge e ímpetu con el cual la administración yanqui se desenvuelve, el equilibrio y el apoyo hacia el ^presidente Trump no son unánimes como para que todos estos se pongan a respaldarlo en el caso de una nueva aventura militar al estilo

de la de los Bush (padre e hijo) y las guerras en Golfo Pérsico.

Por otro lado, los rusos tampoco pueden darse el lujo de abrir un nuevo gran frente. Los conflictos en los que intervienen hasta ahora, el Dombas, Siria tampoco hace la unanimidad en la población que a la vez se ve enfrentada cada vez mas a la austeridad y las privaciones producto del embargo impuesto por la UE y los Estados Unidos.

Por otro lado, la UE golpeada por la salida del Reino Unido, tiene que redefinir su política militar y de seguridad en una situación en la cual no todos hablan el mismo lenguaje. Las divergencias entre los países miembros y fundamentalmente entre los dos colosos Alemania y Francia hacen un poco más difícil esta opción.

Pero el riesgo de un gran conflicto sigue vigente mientras el capitalismo exista como sistema político y económico. Los bandidos imperialistas no ven otra opción para imponer su ley a lo largo y ancho del planeta. Las contradicciones presentes en los distintos escenarios o puntos calientes como el Medio Oriente y África son elocuentes. Estas no son mas que la antesala de los conflictos de mayor envergadura, así como la Guerra de los Balcanes lo fue antes de la primera Guerra Mundial. El resurgimiento de los grupos fascistas en los países metropolitanos no es solo un asunto anecdótico. Es la prueba de como la burguesía empieza a preparar el terreno intoxicando a las masas con los discursos patrioterros y racistas.

En todo caso queda a los socialistas revolucionarios nos queda la gran tarea de construir el partido internacional que combata el problema de raíz, el oprobioso sistema capitalista y el imperialismo

POR EL TRIUNFO DE LAS MOVILIZACIONES CONTRA EL GOBIERNO CORRUPTO DE BARHAN SALI

CONTRA LA AGRESION IMPERIALISTA: FUERA TROPAS DE LA OTAN DEL SUELO IRAQUI ■



EL OSCURO RUMBO DE LA ECONOMÍA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA.

Por: Alberto Castro.

A continuación, abordamos dos temas de interés general. Habiendo transcurrido más de seis meses de la gestión presidencial de Nayib Bukele, tenemos el tiempo prudencial para dirimir balances críticos sobre algunos de los problemas que afectan a la mayoría de la población salvadoreña, siendo estos: economía y seguridad.

Plan de Despegue Económico.

Durante más de una década el país ha estado a la saga de las economías centroamericanas. Desde el año 2,000 solo en dos ocasiones el crecimiento ha superado el 3%, del PIB, mientras que en el último quinquenio promedió el 2.3%. Aun no se cuenta con los datos del 2019. Según las previsiones oficiales no habría cambios: las expectativas rondaban entre el 2.3 y 2.4%, por tanto, superar el atolladero económico es una tarea primordial de la gestión de Nayib Bukele, quien el pasado 9 de enero, después de seis meses, anunció el lanzamiento del Plan de Despegue Económico, que será ejecutado a través de la articulación del Gabinete Económico Ampliado, integrado por ministerios e instituciones autónomas.

A Bukele se le reclama no haber presentado y aplicado políticas claras en materia económica; denotando no tener un rumbo claro. La parsimoniosa respuesta se debe a las adecuaciones socio empresariales locales e internacionales que ha ido modificando, desmantelando las relaciones económicas con el empresariado del FMLN. El contenido discursivo-axiológico anunciado en el Plan Cuscatlan quedó atrás.

El Plan de Despegue Económico (PDE) será lanzado dentro de seis meses. Un año de atraso en materia económica es catastrófico, sobre todo cuando se tiene una economía de bajo crecimiento. Bukele debió priorizar el mejoramiento de la economía de la clase trabajadora, la cual ha soportado

los costos de la crisis. Sin dudas, el PDE será acompañado de un pacto fiscal consistente en un acuerdo entre el gran empresariado y el gobierno, a lo cual las organizaciones sindicales deben oponerle una lucha para aprobar leyes de Responsabilidad Fiscal, por medio de las cuales paguen y contribuyan más al fisco las empresas que ganan más, el pago de impuestos debe ser proporcional a la riqueza y los ingresos, y se elimine el cobro del IVA a productos de la canasta básica y



medicinas.

Plan de Control Territorial.

La violencia y delincuencia expresadas en los altos índices de homicidios, afectan a toda la clase trabajadora y pueblo salvadoreño, por lo que la inseguridad es el problema central de los sectores populares. Desde los viejos y fracasados planes de seguridad ejecutados, como Mano Dura y Mano Súper Dura, al Plan El Salvador Seguro, se mantiene una patente línea de acciones que dejaron intactas las causas generadoras de la actividad de las maras y pandillas, responsables de la mayor parte de la actividad criminal.

Contrario a lo esperado, el combate sin prevención social estimuló el crecimiento de estas agrupaciones. Bukele, en campaña electoral, dijo que abandonaría esas formas de hacer políticas de seguridad pública al equilibrar la balanza en función de la

prevención, combate y la rehabilitación/reinserción. Nada de eso se ha llevado a cabo.

El Plan de Control Territorial se enmarca como continuidad de los planes ejecutados por los anteriores Gobiernos. Existen políticas de Estado a las cuales todo Plan Gubernamental debe adecuarse. Estas consisten en el abandono del dialogo-negociación como medio pacificador, ejecuciones extrajudiciales, tolerancia y promoción de grupos de exterminio al interior de la PNC, entre otras.

En el 2019 hubo más de 2,000 homicidios, un 23, 8% menos que el año anterior. Los datos de muertes violentas están, sin embargo, alterados, en esas cifras no se reflejan todas las ejecuciones extrajudiciales disfrazadas de enfrentamientos, donde no todas las víctimas han sido miembros de maras y pandillas, sino incluso hay civiles. Por tanto, las cifras son superficiales, buscan ocultar la naturaleza real de las fuerzas de seguridad y su carácter de clase, quienes van a los barrios y colonias con el desprecio hacia la niñez y juventud pobre, pues así son formadas por la clase dominante. La clase trabajadora no debe fiarse del brazo armado de la oligarquía, debemos construir propuestas que golpeen drásticamente las causas generadoras de la delincuencia.

La organización es la solución.

Ningún despegue económico debe contemplarse sin que prime los aumentos salariales y ampliaciones de prestaciones laborales a favor de los trabajadores. La configuración militarizada de la seguridad pública es una espada de doble filo, que puede ser utilizada como en el pasado para sofocar cualquier expresión de lucha y protesta social. Sólo la movilización hará posible que como trabajadores seamos protagonistas en todos los temas de interés nacional. ■

NICARAGUA.- LAS ENSEÑANZAS DE LA MASACRE DEL 22 DE ENERO DE 1967

Por Sebastián Chavarría Domínguez

La masacre del 22 de enero de 1967 fue un hecho trascendental en la segunda mitad del siglo XX. Un acontecimiento que hemos olvidado, pero que, aunque un poco lejano, nos enseña enormes lecciones que vale la pena recordar y relacionarlo con el presente.

La creación de la UNO

La Unión Nacional Opositora (UNO) fue una coalición electoral conformada por los siguientes partidos: El Partido Conservador de Nicaragua (PCN), el Partido Liberal Independiente (PLI) surgido en 1944 como oposición al control de la familia Somoza sobre el liberalismo, el Partido Movilización Republicana (MR), el Partido Renovación Nacional (PRN) y el Partido Social Cristiano (PSC). Solo el PCN gozaba de personalidad jurídica, conforme el sistema bipartidista establecido en la Constitución de 1950

La UNO llevaba como candidatos presidenciales a Fernando Agüero Rocha, un líder carismático, y Luis Pasos Arguello, un prestigiado jurista, ambos conservadores. Los principales dirigentes públicos de la UNO eran Fernando Agüero Rocha y Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, quien desde el diario La Prensa creaba una opinión favorable para la oposición.

El deterioro del sistema bipartidista

El PCN y el Partido Liberal Nacionalista (PLN) eran las "paralelas históricas" de un nuevo sistema bipartidista que Anastasio Somoza García logró instaurar después del asesinato del general Augusto C Sandino en 1934. Desde entonces, y de manera gradual, a través de una serie de pactos y componendas, el PCN contribuyó a la consolidación de la dictadura somocista. Esta simbiosis política quedó reflejada en las Constituciones de 1939 y 1950

al establecer que el "partido de la minoría" tenía derecho al 40% de los cargos en las instituciones del Estado. Era un modelo de corporativismo político impulsado por Somoza García, que involucraba directamente al PCN.

La bonanza económica posterior a la segunda guerra mundial (Nicaragua creció un promedio del 6,5 al 10% anual), benefició a la dictadura somocista, pero a mediados de los años 60 del siglo XX, el descenso económico afectó al anteriormente estable sistema



bipartidista. Contradictoriamente, el relativo bienestar económico produjo una clase media que terminó rebelándose contra la dictadura, y que traslada la agitación política a los sectores populares que demandaban mayores libertades democráticas.

La reforma o maquillaje de la dictadura

Después del ajusticiamiento de Somoza García, el 21 de septiembre de 1956, a manos del héroe Rigoberto López Pérez, le sucedió temporalmente en la presidencia su hijo Luis Somoza, quien terminó reeligéndose en la presidencia mediante las elecciones fraudulentas del 2 de febrero de 1957. La presidencia de Luis Somoza se caracterizó por impulsar una reforma política que pretendía reacomodarse a la coyuntura latinoamericana, marcada por el triunfo de la revolución cubana en 1961 y la implementación de la estrategia de "Alianza para el Progreso", por parte de Estados Unidos.

Este contexto obligó a Luis Somoza a iniciar un proceso de reforma política: concedió la autonomía a la Universidad

Nacional de Nicaragua (UNN) en 1958, elevó el Tribunal Nacional de Elecciones (TNE) a rango de cuarto poder del Estado, pero la reforma más importante fue que rompió formalmente la cadena dinástica al permitir que Rene Shick Gutierrez fuese el candidato presidencial del PLN, convirtiéndose en presidente de la república por el periodo 1963-1966.

Marcha atrás

El 30 de julio de 1966, la convención del PLN designó al general Anastasio Somoza Debayle, hermano de Luis Somoza, como su candidato presidencial, a pesar que la Constitución de 1950 estableció que los militares activos que pretendiesen disputar cargos de elección popular tenían que renunciar a su condición, por lo menos seis meses antes de la elección.

Anastasio Somoza Debayle ocupaba el cargo de Jefe Director de la Guardia Nacional desde 1956, cuando Rigoberto Lopez Perez mató a balazos a su padre, Anastasio Somoza Garcia, el fundador de la dinastía.

En esa convención, se produjo la ruptura política del PLN cuando Ramiro Sacasa Guerrero, mostró inconformidad por la continuidad del control de la familia Somoza sobre el PLN, creando el Movimiento Liberal Constitucionalista (MLC).

Cuatro días después de realizada la convención del PLN, el presidente Rene Shick falleció de un infarto, y fue sustituido por el vicepresidente Lorenzo Guerrero, quien terminó el mandato presidencial. La repentina muerte de René Shick coincidió con la paralización de la reforma política, pero al mismo tiempo abrió un enorme hueco en la muralla de la dictadura, por que puso a la orden del día el problema de si la familia Somoza recuperaría directamente el poder.

El ala "jacobina" del PCN

A pesar que el PCN era el otro pilar de sostenimiento de la dictadura somocista, siempre hubo un ala radical, "jacobina" por así llamarle, dentro del



Partido Conservador.

Esta ala "jacobina" siempre intentó derrocar a la dictadura somocista a través de la lucha armada: levantamiento del 4 de abril de 1954, sublevación de pilotos de la Fuerza Aérea en 1957, guerrilla de Olama y Mollejones en 1959, toma de cuarteles en Diriamba y Jinotepe en noviembre de 1960. Todas estas intentonas fueron un fracaso militar, pero, a pesar de las derrotas, esta ala jacobina nunca dejó de conspirar contra la dictadura.

El "Movimiento 11 de Noviembre", dirigido por Fernando Chamorro Rapaccioli, un rico cafetalero, jugó un rol determinante en la conspiración armada previa a la masacre del 22 de enero de 1967.

El ala "jacobina" nunca tuvo una estrategia clara, utilizaba tácticas militares heredadas de la colonia: tomarse por asalto las plazas y cuarteles más importantes, lo que provocaría, según ellos, el levantamiento popular. Así pensaban derrocar a la dictadura somocista, que junto al Zelayismo, había arruinado económicamente a muchas "honorables" familias conservadoras

La conspiración para detener las elecciones

El repentino fallecimiento de René Shick y la postulación de Anastasio Somoza Debayle como candidato presidencial del PLN, intensificaron las conspiraciones dentro del Partido Conservador, que miraba una excelente oportunidad para frenar el ascenso de otro Somoza a la presidencia. Ya no era solo el ala "jacobina", sino también otros sectores del PCN, aunque el eje de la conspiración fue el "Movimiento 11 de Noviembre" del "negro" Chamorro Rapaccioli

Al aproximarse la fecha de las elecciones de 1967, la conspiración del ala "jacobina" se extendió al conjunto de la UNO. A pesar que en la reforma constitucional de 1962 Luis Somoza había elevado al TNE a rango de cuarto poder del Estado, para supuestamente dar garantías a la oposición, para 1967 existía una absoluta desconfianza de parte de la UNO sobre la transparencia e imparcialidad del sistema electoral. Para octubre de 1966, la consigna de la UNO y del diario La Prensa era lograr que el periodo presidencial de Lorenzo Guerrero se ampliara a dos años más, para reorganizar el poder

electoral y reformar la Ley Electoral en términos aceptados por la oposición, el establecimiento de un dialogo con la Guardia Nacional para democratizar el país, etc.

La violencia callejera fue una característica de la campaña electoral de 1966. Para contrarrestar las masivas marchas opositoras, la dictadura somocista creó la Asociación de Militares Retirados, Obreros y Campesinos Somocistas (AMROCS), un grupo paramilitar que atacaba las marchas opositoras a balazos y garrotazos, produciendo varias muertes. Como organismo de autodefensa, la UNO creó los Comités Cívicos de Vigilancia y Defensa del Sufragio Electoral (CIVES)

La Comisión Negociadora

Para tal efecto, la UNO nombró una Comisión Negociadora conformada por Carlos Agüero, hermano de Fernando Agüero, René Sandino Argüello, Alberto Chamorro Benard, prominente miembro del "gran capital" y Fernando 'el Diablo' Zelaya." Esta sería la encargada de establecer contacto con la alta oficialidad de la GN, con Aarón Brown, Embajador de Estados Unidos en Nicaragua; con el Arzobispo González y Robleto, y con el Presidente Lorenzo Guerrero. (Jarquín Edmundo, Pedro Joaquín, paginas No 198-199)

Se trataba, pues, de una conspiración que perseguía la renuncia inmediata de Anastasio Somoza Debayle de la jefatura de la GN y de la candidatura presidencial, así como obligar a la familia Somoza a partir al exilio. En pocas palabras, pretendían reorganizar el poder.

Para obligar al Estado Mayor de la GN a negociar, la UNO organizó la marcha nacional de protesta del 22 de enero de 1967. Decena de miles de personas llegaron a Managua desde todos los rincones, con el objetivo de llegar a Casa Presidencial en la loma de Tiscapa.

La masacre

Pero no se trataba solo de una marcha gigantesca para presionar a la dictadura, sino también que la conspiración incluía un levantamiento armado en diferentes puntos de Managua, para ejercer mayor presión contra la GN y la familia Somoza.

El rumor de un posible levantamiento popular recorrió al país

antes del 22 de enero de 1967. La marcha se realizó, partiendo de la plaza central de Managua rumbo hacia el campo de Marte, sede de la GN, y hacia Casa Presidencial, pero a la altura del antiguo Colegio Calasanz y del Banco Nacional de Nicaragua, en la avenida Roosevelt, comenzó el intercambio de disparos. Algunos testigos afirman que la GN inició los disparos, otros afirman que los disparos se iniciaron desde la manifestación. Nunca se ha podido comprobar la veracidad de ambas versiones, lo que si está documentado es la enorme cantidad de muertos, heridos y desaparecidos por las balas asesinas de la GN.

Los que pudieron ser refugiaron en el Gran Hotel y en los edificios vecinos. Todo el país quedó bajo el Estado de Sitio y la Ley Marcial. Al día siguiente, con la mediación de la Iglesia Católica y personal de la embajada de Estados Unidos, se negoció la salida de los dirigentes de la UNO que estaban en el Gran Hotel. Algunos fueron hechos prisioneros, como fue el caso de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. La represión llenó las cárceles de presos políticos. Las embajadas de Venezuela, México y otros países estaban llenas de asilados.

Las votaciones se realizaron el domingo 5 de febrero de 1967, y Anastasio Somoza Debayle, el tercero de la dinastía, fue electo presidente de la república.

Algunas conclusiones

La conspiración conservadora que organizó la marcha del 22 de enero para iniciar levantamientos armados en Managua, solo con el objetivo de presionar a la dictadura, demostró ser un rotundo fracaso, porque si bien es cierto la gente estaba dispuesta a luchar y morir en la pelea, no existía una organización seria que coherentizara y canalizara la energía popular.

Al final, la dictadura logró imponerse militarmente porque disparó a mansalva contra una masa desorganizada. No todos los que asistieron a la marcha del 22 de enero sabían de las acciones armadas que los conspiradores habían planificado, y que fueron concebidas como acciones de choques dentro de un esquema de negociación política.

Cualquier semejanza con el presente, es pura coincidencia.





CANSANCIO EN LA RESISTENCIA Y CLAUDICACIÓN DE LA DIRIGENCIA DE LA UNAB

Por Melchor Benavente

La lucha contra la dictadura Ortega-Murillo se ha prolongado más de lo esperado. En abril del 2020 se cumplirán dos años de la explosión social que estremeció a la dinastía orteguista. En el ínterin, mucha agua ha corrido bajo el puente.

ACJD y UNAB: dos expresiones políticas diferentes

El estallido revolucionario de abril del 2018 fue una lluvia refrescante sobre la árida sociedad nicaragüense. En todo el país, surgieron miles de grupos de autoconvocados en los diferentes sectores sociales: estudiantes, comerciantes, sectores populares, campesinos, etc. El único sector que ha estado ausente de la lucha, como sector social organizado, han sido los trabajadores, debido al férreo control que ejercen las burocracias sindicales ligadas al gobierno. Este último factor explica las muchas debilidades y vacilaciones en la lucha contra la dictadura.

Este auge de organismos autoconvocados produjo dos expresiones políticas, que reflejaban intereses y sectores sociales diferentes. Por un lado, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) que, aunque fue conformada a inicios de mayo por iniciativa de la Iglesia Católica, representaba la primera oleada del movimiento revolucionario, aunque con una fuerte tendencia hacia la negociación. Las ilusiones democráticas en el sentido que la renuncia de la pareja Ortega-Murillo se lograría por medios pacíficos, sin derramamiento de sangre, fue alentada por la presencia de las cámaras empresariales: COSEP y AMCHAM y el centro de pensamiento FUNIDES.

Por el otro, lado, varios meses después, en octubre del 2018, después de haber ocurrido el fracaso del primer Dialogo Nacional y el aplastamiento militar de los tranques, bajo un estado de sitio de facto, surgió la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), como un frente único entre la Articulación de Movimientos Sociales y otros sectores que aun salían a protestar a las calles, más la ACJD.

La ACJD representaba a sectores

empresariales y de la clase media alta, más algunos movimientos estudiantiles que se formaron al calor de la insurrección de abril. En cambio, la UNAB tuvo desde su inicio una composición de sectores de clase media baja y sectores populares, más los organismos no gubernamentales (ongs) que sumaron a la lucha.

Mientras la ACJD se había concebido así misma como una instancia para

en vez de fusionarse en una sola instancia territorial (departamental y municipal) continúan funcionando, aislados unos de otros, con pocos canales de discusión, comunicación y coordinación. El resultado final de este tipo de funcionamiento, alejado de las exigencias de la realidad política, es el debilitamiento y la parálisis.

La primera tabla de salvación

Y como siempre ocurre, en circunstancias difíciles, la dirigencia de la UNAB se aferró a la primera tabla de salvación que encontró: el paradigma de la "unidad". Ante las dificultades reales, en vez de ser autocríticos y corregir el rumbo, a veces incluso contra el sentimiento de la mayoría de organizaciones que la componen, la dirigencia de la UNAB optó por el acercamiento a la ACJD.

Este acercamiento no fue lineal o de un solo golpe, fue un largo camino en que las fuerzas que querían convertir a la UNAB en nuevo proyecto político fueron derrotadas a lo interno. Fue un proceso gradual y contradictorio, pero al final el resultado fue que la UNAN ha claudicado en toda la línea ante la ACJD, al llamar a conformar la "gran coalición" con esta expresión política del gran capital, que como todos sabemos, han sido aliados estratégicos de la dictadura Ortega-Murillo.

Llamamiento para organizar la "coalición nacional".

El pasado viernes 17 de enero del año 2020, en una conferencia de prensa fue dado a conocer el llamamiento para constituir la "gran coalición". Atrás han quedado los discursos por la renuncia de la pareja dictatorial, se ha abandonado la petición de elecciones adelantadas, incluso se ha abandonado la exigencia de justicia. No esta claro el panorama de las posibles reformas electorales, ni cuando se realizarán las elecciones, si serán anticipadas o no, pero aun así se ha llamado a conformar la gran coalición.

¿Quién cambio de postura? ¿La UNAB o la ACJD? Esta última no ha cambiado su discurso, sigue siendo el mismo. ¿Quién claudicó? ■



la negociación política y la búsqueda de una salida electoral, la UNAB, en sentido contrario, se reivindicaba como un organismo para la movilización y la lucha. Por sus orígenes, composición social y conducción, ambas organizaciones chocaban políticamente porque tenían visiones e intereses contradictorios.

El efecto de la prolongada represión

La resistencia contra la dictadura pasó a una etapa defensiva, en el año 2019. El descenso en la movilización ha afectado a la UNAB, la cual lejos de fortalecerse en los territorios, ha venido debilitándose, producto de una combinación de factores objetivos (represión, descenso de la movilización) y subjetivos (una conducción errática, y una concepción oenegista de la política)

En la medida en que la movilización disminuyó, el peso de los ongs se ha vuelto casi determinante en la vida interna de la UNAB. Prevalece el criterio de organización por sectores sociales y no por territorios. Los diferentes grupos de autoconvocados que todavía sobreviven a la represión,



EL ANUNCIO DE LA “GRAN COALICIÓN NACIONAL”: LA CARRETA DELANTE DE LOS BUEYES

Por Victoriano Sánchez

El panorama político en Nicaragua sigue siendo incierto. El compás de espera que la dictadura logró con el aplastamiento de la insurrección cívica en 2018, se le está agotando rápidamente. Por ello, a pesar que la represión se mantiene en las calles, observamos contradictorios mensajes de una posible apertura política que, por cierto, todavía no arranca.

Reforma constitucional en curso

Con las fraudulentas elecciones del 2016, el FSLN se asignó 60 diputados de los 91 que conforma la Asamblea Nacional. O sea que tiene mayoría absoluta de dos tercios y solo el FSLN tiene los 30 votos mínimos que se requieren para impulsar cualquier reforma parcial a la Constitución. Se quedó con los candados y se tragó las llaves.

No obstante, en noviembre del 2018, con el subterfugio de introducir dos nombres de dos próceres en el preámbulo de la Constitución de 1987, la dictadura Murillo inició una reforma constitucional cuya verdadera finalidad es otra: ante una posible e inminente derrota electoral, está maniobrando para debilitar la institución del presidente de la república, pretende trasladar más poderes a la Asamblea Nacional, contemplando incluso que el parlamento pueda nombrar al gobierno, para diferir los efectos de una casi segura derrota electoral.

Ya fue aprobada el proyecto de reforma constitucional en primera legislatura, pero es casi seguro que los aspectos sustanciales mencionados anteriormente se introduzcan en la segunda legislatura, en el transcurso del año 2020.

La reforma electoral

Después del aplastamiento de la insurrección cívica, al no lograrse la renuncia de la pareja dictatorial en abril-mayo del 2018, al no producirse el paro nacional indefinido en esa coyuntura, cambió drásticamente la correlación

de fuerzas a favor de la dictadura. En esas circunstancias lo único que queda, por el momento, mientras no haya un repunte de la movilización popular, es una salida electoral, un terreno que sigue controlado totalmente por la dictadura.

Bajo esas condiciones, la demanda de una profunda reforma constitucional



y electoral, adquiere una enorme importancia política. Las presiones internacionales, especialmente las sanciones aplicadas por Estados Unidos, están encaminadas a forzar esa apertura política.

El año pasado, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), presentaron por separado sus respectivas propuestas de reformas electorales, las que fueron fusionadas posteriormente en una sola propuesta que se dio a conocer el pasado 12 de diciembre del 2018.

En torno al tema de las reformas electorales, hay dos posiciones dentro de la oposición. Un sector de ella considera que, debido al control absoluto de la dictadura sobre la Asamblea Nacional y demás instituciones del Estado, no es posible lograr una reforma electoral democrática, y que por ello debemos ir a las elecciones bajo cualquier condición. El mejor representante de esta posición fue Mikel Heay, presidente de UPANIC.

Otro sector, sobre todo dentro de la UNAB, plantea que las reformas al sistema electoral deben ser profundas, para devolver credibilidad a la

población que en los últimos procesos electorales optó por abstenerse como forma de protesta ante la prostitución del sistema electoral.

Rechazo a elecciones bajo Ortega
Aparte de estos sectores, existe una posición mucho más radical en un segmento importante de la población, compartida por la mayoría de los exiliados, en el sentido que no se debe ir a un proceso electoral si Daniel Ortega permanece en el gobierno. Una demanda legítima pero que, dada la correlación de fuerzas actuales, es poco probable que se realice.

Las prioridades al revés

Abstrayéndose de esta importante discusión, recientemente la ACJD ha logrado arrastrar a la dirigencia de la UNAB para anunciar la iniciativa de crear una gran coalición nacional.

Así como se lee: “anunciar la iniciativa de creación”, porque todavía no se conocen los documentos bases que permitirían la creación de esa coalición.

No se conoce el programa político, no se conoce el esquema organizativo ni el funcionamiento interno, tampoco se conoce el procedimiento para la elección de candidatos. Un aspecto esencial en cualquier coalición electoral. Y lo que es peor: no se conoce la fecha de elecciones, no se conoce bajo cual Ley Electoral y con qué autoridades se realizará las próximas elecciones.

Al proclamar la idea de la gran coalición nacional, sin haberla realmente constituido, la alianza ACJD-UNAB ha colocado la carreta delante de los bueyes, es decir, han invertido el orden de prioridades, porque lo más importante es crear una gran alianza nacional de diversos sectores sociales, incluidos los partidos políticos que quieran reivindicarse, para forzar una profunda reforma electoral, para democratizar el sistema electoral, y hasta entonces que las diversas fuerzas políticas decidan como organizarse de cara a la batalla electoral. ■



LA OCDE Y EDUCACIÓN:

UNA REFORMA EDUCATIVA PARA EL MERCADO LABORAL, IMPUESTA DESDE ARRIBA Y DESDE AFUERA. I.-PARTE

Por René Tamariz Corea

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) actualmente agrupa a 36 países miembros y trabaja con más de 50 países y economías asociadas. Trabaja y evalúa el funcionamiento de esos países en diversas áreas, ya sea económica, comercial, financiera, social, educativa y otras. Para ser miembro de esa organización, ésta condiciona e impone sus políticas para aceptar la adhesión de un nuevo miembro en diversos y múltiples temas. En América Latina los países miembros de esa organización son México, Colombia y Chile.

El ingreso a la OCDE: ¿proyecto nacional o sumisión?

El modelo de "desarrollo" de las clases dominantes de Costa Rica, conocido como "promoción de las exportaciones", basado en las exoneraciones y subsidios masivos a las zonas francas, está agotado desde hace varios años. Es importante señalar que ese modelo fue impuesto por los Estados Unidos, mediante la Agencia Internacional de Desarrollo (AID), en los años 80 para contrarrestar el gran ascenso revolucionario que se producía en la región centroamericana con el triunfo de la revolución nicaragüense. Frente a ese agotamiento y crisis de su "modelo" la burguesía y sus partidos políticos son incapaces de diseñar y desarrollar un nuevo modelo que posibilite el desarrollo económico y social de la nación. Entonces, ante esa incapacidad, estrechez mental, falta de visión y creatividad, los capitalistas y sus políticos de turno han decidido convertir el ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) como su nuevo proyecto nacional.

Según Eduardo Ulibarri, exdirector del diario La Nación y exrepresentante ante las naciones unidas en el gobierno de Laura Chinchilla, "... el valor central

del ingreso es que fortalecerá el desempeño de las instituciones y, así, hará más robusto el Estado, impulsará su gestión estratégica, estimulará la calidad de sus servicios y mejorará la competitividad del país. Se trata de un proceso de reforma inductivo: modificar realidades concretas a partir de la experiencia acumulada por cientos de casos para incidir entonces en el bienestar general". (La Nación, 9 de noviembre de 2019). A su vez, Dyalá Jiménez, ministra de comercio exterior, encargada del proceso de incorporación de Costa Rica a la OCDE, ha señalado que el ingreso a esa organización "Es una herramienta o una llave para un mejor Estado, que atienda las necesidades de toda la gente". (La Nación, 20 de diciembre de 2019). Como se puede leer y observar, estos personajes le otorgan casi poderes mágicos el ingreso de Costa Rica a la OCDE, lo cual es un engaño y una falacia más, entre otras, que nos quieren vender, las clases dominantes y sus sirvientes, los políticos neoliberales, tecnócratas y burócratas de todo pelaje.

Sin embargo, los hechos y realidades de países que como Colombia o México ingresaron a esa organización, demuestran lo contrario, ya que lejos de haber un "robusto" o "mejor" Estado en esos países lo que existen son países con graves problemas sociales, narcotráfico, asesinatos y otras series de males económicos y sociales que indican que esos Estados miembros de la OCDE están en crisis permanentes y que no han logrado salir del subdesarrollo, pobreza y miseria.

La OCDE y educación en Costa Rica

En el proceso de adhesión a la OCDE, el gobierno de Costa Rica ha pasado la evaluación en 18 comités y áreas de las 22 que deben aprobar los tecnócratas de esa organización a cargo de esas evaluaciones. En el presente artículo nos centramos en el análisis y crítica al área de educación

de la evaluación y recomendaciones realizadas por los funcionarios de dicha institución. El equipo de la OCDE a cargo del análisis, evaluación y recomendaciones del sector educativo lo hizo en los cuatros subsectores de todo el sistema educativo nacional: 1. Atención y educación de la primera infancia (AEPI). 2. Educación básica. 3. Educación diversificada (incluye a colegios técnicos). 4. Educación universitaria. Veamos.

De la AEPI dicho informa plantea que "... sigue siendo el sector más subdesarrollado del sistema educativo de Costa Rica comparado con países de OCDE y otras naciones emergentes de Latinoamérica". (Análisis de la OCDE Acerca de las Políticas Nacionales para Educación). Los hallazgos de dicho informe se pueden resumir de la siguiente manera:

- Más del 37% de los niños no gozan del beneficio de 2 años de educación preescolar y un poco menos del 10% de niños de menos 4 años acceden a centros de educación y otras formas de asistencia pública. Estos servicios se centran en salud y nutrición, no así en desarrollar "habilidades cognitivas, de lenguaje, emocionales y sociales". Asimismo, existen "bajos niveles de gastos en el sector AEPI, apenas del 0,4% del PIB mientras el promedio de OCDE es del 0,6%, considerando que los niños menores de 6 años es el 10% de la población".

En cuanto a la educación básica ese informe señala que se encontraron los siguientes hallazgos.

- El 30% de los jóvenes de 15 años han abandonado la escuela y un 33% de los que continúan en el sistema "carece de competencias básicas en ciencias, lectura y matemáticas. Al finalizar la educación básica, los estudiantes de familias pobres están dos años por debajo de sus pares de ambientes más ricos y pocos harán la transición a la educación universitaria o a un buen trabajo". Según ese análisis "El desafío más importante



de la educación básica en Costa Rica es la consolidación de una profesión docente de alta calidad". Solamente 19 programas de docencia de los 259 que existen cuentan con "calidad asegurada mediante la acreditación". Ese informe señala que "El alto grado de autonomía universitaria... hace difícil garantizar que los programas estén preparando adecuadamente a los docentes para los enfoques basados en competencias que el nuevo plan de estudios requiere. La competencia por puestos de docentes... no evalúa efectivamente lo que hace un buen docente y el sistema de prueba es muy débil. Pero la mayor brecha es un conocimiento compartido de lo que significa la docencia en términos de las competencias esperadas...". Ese informe también cuestiona las medidas en cuanto al rendimiento de la educación, la evaluación nacional de resultados, el monitoreo y evaluación de formulación de políticas del MEP, la falta de conocimientos en estadísticas e investigación del personal.

Respecto a la educación diversificada el informe plantea una serie de hallazgos y cambios que se deben implementar en ese subsector.

- Plantea que "... Costa Rica necesita transformar un sistema de educación diversificada diseñado para preparar una pequeña élite para la universidad en uno con un rol más variado, tomando también en cuenta a aquellos que ingresan al mercado laboral o que buscan opciones de capacitación. Esto debe reflejar tanto las necesidades del mercado laboral de rápido cambio como los intereses de los estudiantes, preparándolos como ciudadanos y abriendo una serie de trayectorias profesionales...". Se señala que "Aunque el 51% de las personas de 25 a 34 años... tiene ahora título académico de educación media, esto es mucho menor al porcentaje de la OCDE (84%) y está por debajo de Chile, Colombia y Brasil en América Latina...". Asimismo, se señala que "La repetición de grado -comúnmente precursor de la deserción escolar- sigue siendo la opción por default especialmente en los años de ingreso de "transición" para tercer ciclo y educación diversificada, en donde los niveles de repetición de grado y deserción escolar son lo más altos". En relación

a los docentes se dice que "En Costa Rica existe evidencia de que, a pesar de la capacitación, muchos docentes no entienden las implicaciones de la nueva reforma... y débiles habilidades pedagógicas, tiempo de aprendizaje limitado y una carencia de libros de texto crea obstáculos importantes para la implementación del salón de clases". A su vez cuestiona la vieja prueba de bachillerato al plantear que "El hecho de que todos los estudiantes deban aprobar todas las materias del examen para que se les otorgue el diploma de



conclusión de estudios de educación secundaria y puedan ingresar a la educación universitaria no es una motivación para aquellos que tienen dificultades para permanecer en la escuela".

Sobre la educación técnico vocacional, como parte de la educación diversificada, ese informe señala los siguientes aspectos.

- "Los colegios técnicos aún representan más de un cuarto de la matrícula en este nivel de educación, mucho menos que en muchos países de la OCDE". Señala que en Costa Rica se "carece del tipo de institución de educación media vocacional que se encuentra en muchos países de la OCDE y otros países -instituciones que puedan convertirse en un foco de especialización técnica y excelencia, participación del empleador y oportunidades de aprendizaje basadas en el trabajo- mientras que posponen la elección de una carrera meta hasta el nivel de educación diversificada". Critica el hecho de que "la mayoría de colegios técnicos en realidad son grandes instituciones académicas dado que incluyen de los grados 6 al 9 así como grados de educación diversificada en donde todos los estudiantes buscan

el Bachillerato. Segundo, Costa Rica no ha desarrollado ni traído a escala programas profesionales post educación secundaria más cortos - de entre seis meses y dos años- que brinden una buena proporción de la capacitación profesional requerida en muchos países de la OCDE así como en muchos países latinoamericanos".

Referente a la educación universitaria ese informe plantea una reforma profunda al presupuesto del FEES y otros aspectos. Veámoslo.

- Se plantea que "el 51% de los estudiantes costarricenses matriculados en instituciones privadas están excluidos de este sistema de subsidio público generoso y tienen un acceso extremadamente limitado a becas o préstamos". Señala ese informe que la "mayoría de estudiantes que se benefician de las universidades públicas con de contextos acomodados". Que "Los estudiantes que pueden pagar educación secundaria privada tienen el doble de probabilidades de poder ingresar a las universidades públicas comparados con aquellos que asisten a una escuela secundaria pública". En Costa Rica no se "hace muy bien en términos de acceso a educación universitaria para aquellos estudiantes de contextos pobres -en sólo 7.5%, la tasa neta de matrícula para el quintil de ingresos más bajo está muy por debajo de los estudiantes de contextos más acomodados (54%) y muy por debajo de la mayoría de los países de la OCDE". Plantea que hacia el futuro "quienes se benefician de la educación universitaria tendrán que asumir más costos y los fondos públicos se tendrán que asignar de maneras mucho más equitativa". Termina planteando "una reforma significativa en cuanto a la forma en que se utiliza el presupuesto de FEES, sino también en cuanto a la forma de priorizar los fondos dentro del presupuesto general de educación, con una reducción en el gasto universitario en favor de la inversión en educación preescolar, primaria y secundaria". Al final del tema universitario se señala la necesidad de desarrollar e implementar una estrategia a largo plazo y formar una "autoridad pública líder" en el sector universitario. ■



EL ACUERDO DE COOPERACIÓN DE ASILO, UNA BURLA PARA LOS MIGRANTES CENTROAMERICANOS

Por Armando Tezucún

El acuerdo de "Tercer País Seguro" o "Acuerdo de Cooperación de Asilo" (ACA) firmado en julio del año pasado entre los gobiernos de Estados Unidos y Guatemala, supuestamente permitirá a migrantes no guatemaltecos tramitar sus solicitudes de asilo al país norteamericano desde el territorio chapín, donde residirían temporalmente con comodidades básicas.

Sin embargo, a medida que se ha desarrollado la implementación del acuerdo, éste se ha revelado como un fiasco y una burla para los trabajadores migrantes salvadoreños y hondureños, evidenciando su carácter disuasivo destinado a desalentar la migración. Claro, el complemento para desalentar el flujo migratorio son las medidas represivas implementadas por el gobierno mexicano en la frontera con Guatemala, resultado de un acuerdo con el gobierno de Trump, acuerdo firmado bajo amenazas, al igual que la firma del ACA; y así mismo el endurecimiento de la represión en la frontera mexicano-estadounidense.

La primera persona que arribó a territorio guatemalteco enviado por las autoridades gringas bajo el ACA fue un hondureño, que llegó el 21 de noviembre de 2018, quien decidió regresar a su país. Hacia mediados de enero del presente año, 143 salvadoreños y hondureños habían sido enviados a Guatemala, a muchos de ellos ni siquiera se les informó de su destino, y solamente cinco decidieron quedarse y hacer el trámite de asilo. La decisión de regresar a las duras condiciones de violencia, desempleo y miseria de Honduras y El Salvador es motivada también por el total abandono e irresponsabilidad con que los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos han tratado a los migrantes trasladados al territorio guatemalteco.

El 15 de agosto de 2018 Mauricio Claver-Carone, asesor del gobierno de Trump para Asuntos Hemisféricos aseguró que para Guatemala recibir a los migrantes "no le significaría ningún costo", que su gobierno "están comprometidos a ayudar a Guatemala bilateralmente" y habló de "organismos internacionales para cubrir los costos de este proceso y para crear la capacidad necesaria" (La Hora 8/01/2020). El ahora exministro de Gobernación



Enrique Degenhart, firmante del acuerdo, aseguró varias veces que el convenio no le costaría a Guatemala ninguna erogación; el 7 de enero, en entrevista a Emisoras Unidas, explicó las razones por las cuales el gobierno de Guatemala no se hace cargo de los solicitantes de asilo diciendo: "Como Ministerio de Gobernación o como Estado no podemos hacer ningún tipo de erogación presupuestaria para darles es tipo de servicios colaterales o servicios de atención" (Idem).

Ante tal actitud criminal de ambos gobiernos, que se desentienden del cuidado de los migrantes, algunas organizaciones humanitarias se han hecho cargo. Al llegar al aeropuerto, el Instituto Guatemalteco de Migración les da 72 horas para que decidan si regresan a su país o se quedan en Guatemala a tramitar la solicitud de asilo. Luego son trasladados a la Casa del Migrante en la capital guatemalteca, a cargo de la Iglesia Católica a través

de la Pastoral de Movilidad Humana, donde reciben alimentos, ropa, atención médica y psicosocial, y albergue; la asociación Refugio de la Niñez ha cooperado también en la atención a los migrantes. Ninguna de las dos recibe fondos del Estado para esa labor. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) han colaborado también para el traslado de los migrantes a sus países de origen, y esta última apoya financieramente a los religiosos a cargo de la Casa del Migrante. Pero ambas organizaciones internacionales han dejado claro que no hacen parte del ACA y desconocen los anexos del mismo. Su intervención ha sido por razones humanitarias.

Exigimos al nuevo gobierno de Alejandro Giammattei la derogación de ese vergonzoso acuerdo, firmado bajo amenazas de represalias por parte del nefasto Donald Trump, que garantice el libre tránsito de centroamericanos migrantes y la expulsión de los agentes gringos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Para los migrantes el ACA es un fracaso y no deja otra opción que hacer el intento de llegar a los USA una y otra vez. El 14 de enero una nueva caravana con rumbo a Estados Unidos partió de San Pedro Sula en Honduras. El 15 llegaron en grupos a la frontera con Guatemala, donde hubo incidentes con la policía guatemalteca y agentes del ICE. Para el sábado 18 se calculaba en unos 4 mil migrantes hondureños, salvadoreños y guatemaltecos que se dirigían en grupos a los puntos fronterizos con México. Mientras López Obrador les prometía cuatro mil empleos en México, la Guardia Nacional mexicana los contenía por la fuerza en el puente de la frontera Rodolfo Robles y capturaba a los que intentaban cruzar por los ríos fronterizos. ■